



Preparado por Ilyana Albarran y Gretha Burchard, estudiantes de post grado, para el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios (IPMCS)

La Responsabilidad Democrática en la Prestación de Servicios

Los factores que impulsan la estabilidad democrática: El crecimiento económico VS opinión pública

La crisis económica de 2008 afectó a todos los países de América Latina y el Caribe. La contracción del crecimiento económico, el aumento del desempleo y la pobreza, impactó a todos los países de la región. En los últimos años, académicos han argumentado que las crisis económicas pueden conducir a la inestabilidad democrática, y en especial, en los países más pobres (Przeworski *et al.*, cf. Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública, LAPOP, 2010).

Sorprendentemente, el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (2010) encontró que el estado de la economía sólo tuvo un efecto limitado en la reducción de los valores democráticos en la región. El factor que resulta afectar más a los valores democráticos, que el estado económico de un país, es la opinión pública respecto al manejo, o el desempeño, del gobierno ante la condición económica. Por lo tanto, se puede suponer que los efectos negativos de una crisis económica, sobre los valores democráticos de los ciudadanos, pueden ser mitigados por la percepción positiva del desempeño del gobierno, decir la reacción positiva del gobierno ante la crisis económica.

La importancia de la legitimidad política

Específicamente, el estudio LAPOP concluyó que en cualquier país determinado, la creencia ciudadana en la "legitimidad" de su gobierno, es un requisito para la estabilidad política. En otras palabras, como se observó por Gibson et al. (2005), la legitimidad del sistema político es un elemento esencial para mantener una democracia estable. La legitimidad se traduce en apoyo al sistema y en tolerancia a la oposición política (2010).

En el estudio LAPOP, la legitimidad se describe como la creencia de los ciudadanos en el sistema judicial de su gobierno, el respeto y el orgullo en sus instituciones políticas y el grado en que los ciudadanos se sienten salvaguardados y protegidos por ellas. En el mismo estudio, se

encontró que entre los múltiples factores que afectan a la 'legitimidad ', y por lo tanto, el apoyo ciudadano hacia una democracia estable, es la capacidad del gobierno de satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos, así como la percepción ciudadana del grado de corrupción existente en el sistema político y administrativo. La confianza en las instituciones de gobierno; las fuerzas armadas, los medios de comunicación, los procesos electorales, el sistema político, el sistema administrativo, etc., y la responsabilidad del gobierno en su prestación de servicios públicos, son factores esenciales para salvaguardar la legitimidad del gobierno y por consiguiente, el apoyo democrático de ese sistema.

Aproximando la legitimidad: la transparencia y la accesibilidad

La percepción del buen desempeño del gobierno, en su prestación de servicios públicos, está directamente relacionada con la percepción de legitimidad de ese mismo gobierno. En otras palabras, la legitimidad del gobierno depende de la responsabilidad democrática en la prestación de servicios. Una forma de dar legitimidad a la prestación de servicios públicos, es haciendo que el gobierno sea más transparente. Al hacer frente a los problemas de corrupción, por ejemplo, garantizando que los funcionarios corruptos se hagan responsables de sus actos, uno también contribuye a la creación de un gobierno legítimo. No es suficiente hablar contra los aspectos negativos de la corrupción sino es necesario actuar y sancionar actos corruptos para prevenirlos en el futuro.

Como la democracia se basa en la suposición de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y merecen la misma representación en el establecimiento de prioridades en la sociedad, mantener acceso abierto al gobierno es esencial. Con el fin de garantizar la responsabilidad democrática en la prestación de servicios, uno necesita garantizar el carácter representativo del proceso político y la accesibilidad a las instituciones de gobierno para todos los ciudadanos. A menudo, el contacto ciudadano más frecuente con su gobierno ocurre con los representantes e instituciones locales. Esto es porque el gobierno local es el más cercano a los ciudadanos. Con el fin de garantizar la accesibilidad, la descentralización, así como el empoderamiento ciudadano, y también mantener una relación funcional entre las autoridades locales, estatales, y nacionales es importante.

Acceso al gobierno en Latinoamérica

Después de haber vivido dictaduras extremadamente centralizadas en varios países, América Latina empezó a implementar políticas descentralizadoras en la década de los ochenta, en muchos casos con la ayuda del Banco Mundial, las Naciones Unidas, y otras organizaciones internacionales para el desarrollo. Para muchos gobiernos, las políticas de descentralización se adoptaron para establecer la prestación de servicios de acuerdo a la demanda directa de los ciudadanos. Este punto de vista supone que los organismos administrativos con el mayor contacto con la ciudadanía, por ejemplo, gobiernos locales, están en mejor posición para reunir información sobre las preferencias locales y por consecuencia, están en mejor posición para

responder de manera más eficiente a las variaciones de demanda que el gobierno nacional (Albarran y Garcia - Zamor 2010). Detrás del impulso para descentralizar hubo varias consideraciones. Entre ellas no sólo el intento de mejorar la capacidad del gobierno para tomar decisiones, y adaptarse a los cambios en las preferencia, sino también un esfuerzo para mantener la legitimidad y la fe en el sistema político (Manor 1999, cf . Ibid). Al cerrar la brecha entre el gobierno y la sociedad civil, se creía que una mayor responsabilidad política se podría lograr. En otras palabras, pasos hacia la descentralización también se tomaron para ayudar a promover la rendición de cuentas y reducir la corrupción. La teoría es que esto ocurriría como resultado de la presión de los ciudadanos hacia el gobierno local. Como los ciudadanos sienten más familiaridad y conocimiento de las acciones gubernamentales locales, es más fácil para ellos presionar y sancionarlas (por sus acciones corruptas) a las autoridades locales que las autoridades de carácter nacional (ibíd.). En fin, las políticas de descentralización han traído un enorme aumento en la importancia de los gobiernos locales. La participación de los ciudadanos en el gobierno se ha hecho mucho más accesible y factible ya que las instituciones políticas y administrativas locales están más cercanas a la población. Al tener un mayor acceso a la administración local, los ciudadanos pueden exigir la responsabilidad democrática en la prestación de servicios.

Transparencia en América Latina

Como resultado de la descentralización, las burocracias municipales se han convertido en el punto de emplazamiento de decisiones respecto a proyectos de infraestructura social y la prestación de servicios públicos. Las medidas de descentralización y el fomento de los gobiernos locales ponen la luz de la transparencia en un objetivo más tangible. Los gobiernos tienen la posibilidad de hacer sus procesos más transparentes, por ejemplo, animando a los ciudadanos a participar e involucrarse en las iniciativas de los gobiernos locales. Mediante la garantía de la transparencia pública, el acceso a la información, acceso a los procesos gubernamentales, rendición de cuentas, etc., el tema de la corrupción puede ser abordado.

La corrupción es un problema mundial, sin embargo, las encuestas indican que en América Latina, la percepción de corrupción está por encima del nivel promedio mundial, y las mejoras entre 2005-2009 han sido marginales.

Dado que la corrupción puede existir en todas partes del mundo, académicos se han dedicado a proponer estrategias para minimizar y erradicarla.

Por ejemplo, se ha propuesto la instalación de las siguientes características institucionales;

- 1) La creación de sistemas jurídicos independientes y sólidos,
- 2) El fortalecimiento del Estado para garantizar el Estado de Derecho,

- 3) Aumento de los controles externos, así como las medidas de vigilancia y evaluación, lo que incluye el lanzamiento de las organizaciones de la sociedad civil contra la corrupción (como los centros de asesoramiento jurídico para los ciudadanos)
- 4) Y la introducción de reformas preventivas que reduzcan las oportunidades para la corrupción (Spector 2005 , Vogl 2012) .

En cuanto a los procedimientos;

Es de suma importancia hacer cumplir las leyes que tipifican como delito el abuso de un cargo público. La imposición de la estricta responsabilidad de los funcionarios por sus acciones, el desarrollo de marcos y normas internacionales, y al mismo tiempo el poner en marcha programas anti corrupción a nivel micro, es decir, sector por sector, es imperativo (Vogl 2012, Schaeffer 2005, Spector 2005, Pepys 2005).

En el plano económico;

La instalación de incentivos y sanciones que promueven la buena conducta y sancionan la corrupción es útil, así como la mejora de las condiciones de empleo en los sectores públicos (por ejemplo, los sectores de seguridad pública, oficinas postales, oficinas de respuesta a emergencias, etc., tanto como los puestos en las administraciones de gobiernos locales) en términos de nombramiento, remuneración, capacitación, (Winbourne 2005, Pepys 2005).

Por último, la corrupción puede - y debe – ser combatida en el plano cultural. Se debe fomentar la conciencia mediante la realización de campañas que señalan los efectos negativos de la corrupción, así como la difusión de información a través de medios sociales. Los funcionarios públicos pueden ser entrenados más a fondo en relación con las implicaciones de servicio público, el interés público, y medidas contra la corrupción.

Para finalizar, hay un elemento que es fundamental y sin el cual los procedimientos contra la corrupción son muy probable que fallen: la voluntad política para cambiar, para combatir los orígenes y las características que facilitan la continuación de la corrupción. La "legitimidad" del gobierno es un elemento esencial para sostener una democracia estable. En la lucha contra la corrupción; al garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la sanción de agentes corruptos, la vigilancia de las instancias locales, la promoción de la participación ciudadana, y al garantizar la responsabilidad democrática en la prestación de servicios públicos, uno aproxima la legitimidad y fortalece la democracia.

- Albarran, I and Garcia-Zamor, Jean-Claude. (2010). Decentralizing Cuba's Health Care System. *Journal of International Studies and Development*, 10: 132-157.
- LAPOP, Proyecto de Opinión Pública de América Latina (*Latin American Public Opinion Project* in English) (2010). Cultura política de la democracia en México, *Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles*: Pablo Paras García, Carlos López Olmedo, Dinorah Vargas López, Dr. Mitchell A. Seligson, Vanderbilt University.
- Pepys, Mary Noel Pepys (2005). Justice System in Spector, B. I. (2005), ed. *Fighting corruption in developing countries: Strategies and analysis*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Schaeffer, Michael (2005). Public Finance in Spector, B. I. (2005), ed. *Fighting corruption in developing countries: Strategies and analysis*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Spector, B. I. (2005). *Fighting corruption in developing countries: Strategies and analysis*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Vogl, F. (2012). *Waging war on corruption: Inside the movement fighting the abuse of power*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.
- Winbourne, Svetlana (2005). Environment and Natural Resources in Spector, B. I. (2005), ed. *Fighting corruption in developing countries: Strategies and analysis*. Bloomfield, CT: